

Palabras del Gobernador del Banco de México, doctor Agustín Carstens, durante la clausura del Seminario “La función de la banca para la estabilidad y el crecimiento económico”.

Jueves 10 de junio de 2010, ciudad de México.

- María Teresa Fernández Labardini, Secretario Ejecutivo del Instituto para la Protección del Ahorro Bancario.
- Ignacio Deschamps González, Presidente de la Asociación de Bancos de México,
- Señores Consejeros del IPAB
- Distinguidos expositores en este Seminario
- Señoras y señores

Generar y mantener la confianza en el futuro, a su vez, ha sido y seguirá siendo el perenne desafío que enfrentan todas las sociedades humanas para progresar y aspirar a un mejor porvenir.

El tremendo cataclismo financiero que experimentó el mundo en meses recientes, y cuyas secuelas aún generarán inquietudes y dificultades por un largo tiempo, se explica en última instancia como una profunda crisis de confianza que se desató con toda su fuerza en septiembre de 2008, cuando la quiebra inesperada de Lehman Brothers envió señales erráticas y desconcertantes acerca del manejo de una crisis financiera que hasta antes de esa fecha se conjeturaba que podría estar razonablemente bajo control.

Bastó con esa pérdida de confianza para que la crisis se extendiera más allá del ámbito estrictamente financiero a la economía real en prácticamente todo el mundo y en unas cuantas horas.

Esta crisis hizo realidad, de forma dramática, aquella famosa sentencia de Séneca: “Cuando el navegante no sabe a qué puerto se dirige, todos los vientos son contrarios”. Al romperse los delicados hilos que sostienen la confianza en la permanencia de los contratos y en el cumplimiento efectivo de las promesas de pago, así sea momentáneamente y por un evento errático, los mercados pierden la brújula y todos los vientos parecen conspirar en nuestra contra.

El negocio bancario, como todos ustedes saben, cumple la función esencial de conciliar pasivos que tienden a ser de corto plazo, porque los depositantes demandan liquidez ante todo tipo de incertidumbres, con activos que necesitan ser de largo plazo, porque las inversiones productivas requieren de tiempo para madurar y para generar los retornos deseados.

Es tal esta disparidad entre las necesidades y motivaciones de una y otra parte (que son los ahorradores, por un lado, y los emprendedores, por otro), que la probabilidad de corridas bancarias no sólo es elevada, sino que seguramente se materializará en algún momento, a menos que existan mecanismos que den certeza a los depositantes de que sus derechos e intereses serán preservados pase lo que pase y de acuerdo con parámetros ciertos, conocidos de antemano.

Precisamente debido a esto es que la financiera es una de las pocas actividades económicas que debe estar altamente regulada y

supervisada. Lo que se busca es que los intermediarios no asuman riesgos indebidos, no tengan problemas de liquidez y, sobre todo, que no caigan en una situación de insolvencia, que es el peligro más grave.

La historia, incluida desde luego la historia reciente, nos ha enseñado, sin embargo, que la regulación y la supervisión no son infalibles y que ha costado mucho trabajo que la regulación y la supervisión no se queden constantemente rezagadas frente a la innovación financiera.

Debido a todo esto es que los mecanismos de garantía o vacunas de confianza que se requieren para consolidar la confianza de los depositantes y neutralizar la incertidumbre que incentiva los episodios de corridas bancarias, sólo son creíbles y viables cuando son otorgados por el Estado.

Sólo el Estado puede dar credibilidad a tales garantías y el Estado puede hacerlo sólo porque tiene la facultad de imponer gravámenes y contribuciones extraordinarias, en caso de necesidad extrema, para preservar el funcionamiento del sistema así como los derechos de unos y de otros.

En este sentido, no es casual que en el camino de salida de la crisis global que hemos padecido nos encontremos con severas crisis fiscales en varios países e incluso en regiones completas del mundo. Conforme las economías hoy en problemas fortalezcan sin titubeos sus balances fiscales, arrastrando el costo que esa corrección inevitablemente acarreará, en esa misma medida el mundo superará más rápidamente este trastorno global y en esa

misma medida podrán recuperarse la producción y el comercio mundiales, junto con los empleos.

En México conocemos bien este doloroso proceso porque lo vivimos tras el estallido de la crisis de 1994-1995 y experimentamos todas sus secuelas y etapas. De esa aleccionadora y difícil experiencia nació, precisamente, el IPAB.

En efecto, como ya se ha dicho varias veces el día de hoy, el seguro a los depósitos bancarios cumple la función crucial de generar confianza, que es el activo máspreciado con que debe contar no sólo la intermediación financiera sino toda la actividad económica de un país. Pero los desafíos no terminan ahí, con el establecimiento de un seguro a los depósitos administrado por una institución del Estado y con el aval de éste. Hay tres condiciones esenciales para el buen funcionamiento de un seguro de depósitos:

1. Un diseño eficiente.
2. Un marco jurídico que le de a las instituciones reguladoras y a la agencia que administra el seguro facultades amplias y suficientes para la resolución oportuna de crisis, y
3. Una capitalización igualmente suficiente que, sin embargo, no encarezca de forma innecesaria la intermediación bancaria.

Por supuesto, es mucho más fácil enunciar estas tres condiciones que hacerlas realidad. No hay un modelo único e infalible. De hecho, encontramos grandes disparidades en el mundo respecto del diseño que diferentes países han aplicado a sus modalidades de seguro de depósitos. Y la persistencia de diferentes episodios de

crisis y corridas bancarias, en diferentes regiones y latitudes, nos muestra que aún tenemos mucho que aprender.

El episodio de Northern Rock en el Reino Unido, por ejemplo, nos enseñó que una de las causas de crisis puede radicar en la complejidad de las reglas para determinar el monto del seguro desde la perspectiva del depositante común, así como en la existencia de una zona de incertidumbre respecto de los plazos para el pago de los depósitos asegurados.

El caso de los bancos de Islandia, a su vez, nos enseñó que se requiere de una total certidumbre acerca de si la cobertura de los depósitos también incluye a los depositantes de las sucursales de dichos bancos establecidas en otros países. Esta indefinición ocasionó graves conflictos jurídicos internacionales.

No todos los países, por ejemplo, establecen el mismo orden de prelación entre acreedores en caso de quiebra bancaria, en especial tratándose de sucursales extranjeras o de depositantes que no son residentes. Por eso en México, entre otras razones, no se ha permitido el establecimiento de sucursales de bancos extranjeros, sino sólo de subsidiarias de matrices extranjeras que son, para todo efecto, bancos mexicanos. Dicho sea de paso, esta característica desvanece por completo cualquier conjetura acerca de una supuesta falta de soberanía sobre el sistema de pagos nacional.

Como parte de este proceso de aprendizaje mundial, derivado de las experiencias recientes, algunos países han ampliado las coberturas de sus seguros de depósitos, mediante incrementos definitivos de los montos cubiertos. Tales han sido los casos de

Irlanda, de Alemania, de Estados Unidos, de Reino Unido, de Francia, de Grecia, de España, de Holanda, de Italia y de Austria.

Otros países, como Australia y Nueva Zelanda, han incrementado la cobertura, pero lo han anunciado sólo como una medida temporal.

A su vez, algunas otras naciones que no contaban con seguros de depósitos los han establecido.

De estas experiencias recientes en materia de seguros de depósito en diferentes países se desprende la lección de que es preferible que tales modificaciones se hagan de manera coordinada a nivel global. De otra forma, si aumenta la dispersión de las coberturas a los depósitos bancarios entre distintos países se incrementan los riesgos de suscitar episodios desestabilizadores.

Persiste, así, la necesidad de perfeccionar los seguros de depósito de acuerdo a las tres condiciones que mencioné – diseño, atribuciones definidas y capitalización suficiente- y que son las consideradas en los nuevos “Principios Básicos del Seguro de Depósitos en Efectivo” que difundieron el año pasado la Asociación Internacional de Aseguradoras de Depósitos y el Comité de Basilea de Supervisión Bancaria. Me detendré un poco en cada una de ellas.

- Respecto del diseño del seguro, debe quedar perfectamente claro qué obligaciones serán cubiertas por el seguro, especialmente cuando los bancos tienen presencia transfronteriza, ya sea a través de sucursales o de subsidiarias; asimismo, el acceso a los depósitos cubiertos por

el seguro debe ser expedito, de forma que no genere ninguna incertidumbre en los depositantes.

- Las agencias que administran el seguro deben tener atribuciones legales definidas y suficientes para: 1. Actuar con rapidez, ya que la crisis nos enseñó de nuevo que los problemas de los bancos deben resolverse de inmediato, idealmente “en un fin de semana”, 2. Llevar a cabo una resolución aun cuando el capital del banco en cuestión sea, en principio, positivo. Esto es: el derecho de los accionistas a ser resarcidos no significa que tienen derecho a detener la acción de la autoridad, y 3. Coordinarse eficientemente con el resto de las agencias que constituyen la red de seguridad del sistema financiero, especialmente en crisis “sistémicas”. Al respecto, como ya he dicho en otras ocasiones, deben crearse mecanismos eficientes de coordinación y cooperación encargados de preservar la estabilidad financiera de todo el sistema, tanto en el ámbito nacional como en el internacional.
- Finalmente, está el requisito de la capitalización suficiente de las agencias que administran los seguros de depósito y que es objeto de no pocas polémicas, de acuerdo con los intereses de los involucrados. Debe entenderse, en todo caso, que la agencia debe contar con el capital suficiente para ejecutar de forma expedita el pago de los depósitos garantizados y para la ejecución de otro tipo de resolución bancaria, como la compra de activos, la asunción de pasivos o la apertura de un banco “puente” que permita garantizar la continuidad y fluidez del sistema financiero en su conjunto, entre otros ejemplos.

A diez años de la creación del IPAB el balance en México es indudablemente satisfactorio: Nuestro seguro de depósitos cumple con los buenos principios reconocidos internacionalmente, se logró de forma exitosa y sin sobresaltos transitar de una cobertura universal a una limitada y se estableció en el marco jurídico un sistema de alertas tempranas, así como los métodos para resoluciones bancarias.

Sin embargo, nos quedan varios desafíos en el futuro inmediato. Menciono los tres que me parecen más importantes: 1. Definir el cobro de primas de acuerdo con el riesgo, 2. Establecer un fondo específico que permita llevar a cabo resoluciones bancarias, y 3. Avanzar en el marco legal de las resoluciones. Las autoridades financieras ya han diseñado un conjunto de cambios que complementan y completan el marco de las resoluciones – por ejemplo, el acortamiento de los plazos de audiencia para los accionistas – así como un marco jurídico para la liquidación judicial de bancos. Es de esperarse, como lo anunció hace unas horas el Secretario de Hacienda, que este conjunto de modificaciones sea sometido en fecha próxima a la consideración del Congreso de la Unión.

Señoras y señores:

Las autoridades financieras tenemos la delicadísima encomienda de crear, transmitir, mantener y acrecentar la confianza. Esto

implica que debemos prever en la medida de lo posible, así como proveer hoy lo que podría demandarnos el mañana.

La experiencia nos deja siempre lecciones valiosas para mejorar no sólo nuestras previsiones, sino también para fortalecer las provisiones que debemos hacer para tiempos futuros que siempre tendrán una dosis de incertidumbre. La crisis mundial también nos ha recordado, una vez más en la historia, la importancia de los principios básicos que permiten el progreso económico de las sociedades y de las naciones.

Principios que hoy adquieren aún mayor relevancia: estabilidad del poder adquisitivo de la moneda a través de una política monetaria responsable; administración prudente de las finanzas públicas que evite los desequilibrios crónicos y crecientes entre ingresos y egresos; reglas claras y ciertas que garanticen el cumplimiento de los contratos; manejo juicioso del endeudamiento; condiciones que propicien el ahorro de largo plazo y que permitan esperar a todos, con fundamentos ciertos, un futuro mejor.

Todo eso encierra el valor de la confianza que tenemos, día con día, la obligación de mantener y acrecentar.

Muchas gracias.

